

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:

23 de febrero de 2026

Contacto:

press@democracyforward.org

Distritos Escolares y Educadores de Minnesota Piden a la Corte que Detenga Actividades Migratorias en las Escuelas

Moción de Emergencia Solicita Orden Judicial para Restablecer Protecciones para Estudiantes, Docentes y Comunidades

ST. PAUL, Minn. — Distritos escolares y educadores de Minnesota regresaron hoy a la corte federal para solicitar una orden de emergencia que detenga las actividades de aplicación de leyes migratorias en y alrededor de las escuelas públicas, advirtiendo que la presencia de agentes federales cerca de salones de clase y paradas de autobús escolar está afectando gravemente la asistencia, agotando los recursos escolares y traumatizando a niños y niñas. La presentación ocurre mientras el país celebra la Semana de las Escuelas Públicas, una celebración anual dedicada a reconocer a los educadores y al personal que marcan la diferencia en las escuelas públicas de Estados Unidos y en las comunidades a las que sirven.

Los demandantes —Fridley Public Schools (ISD 14), Duluth Public Schools (ISD 709) y Education Minnesota— presentaron una moción solicitando a la Corte Distrital del Distrito de Minnesota que bloquee la abrupta revocación, por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), de protecciones históricas que, durante más de tres décadas, limitaron la aplicación de leyes migratorias en “lugares sensibles”, como las escuelas. Los demandantes presentaron una demanda a principios de este mes para bloquear actividades migratorias en o cerca de escuelas públicas. Democracy Forward, Zimmerman Reed LLP, Nilan Johnson Lewis PA y The Law Office of Kevin C. Riach representan a los demandantes.

Durante décadas, la política federal exigía que los agentes de inmigración evitaran realizar operativos en escuelas y paradas de autobús escolar, salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, en enero de 2025, el DHS rescindió esas protecciones mediante un breve memorando que eliminó los requisitos de aprobación previa, las salvaguardas de reporte y cualquier límite claro a la aplicación de la ley cerca de las escuelas. La moción de los demandantes sostiene que el abandono de esas protecciones, sin explicación, viola la Ley de Procedimiento Administrativo y causa daños irreparables a estudiantes y comunidades escolares. La moción solicita a la corte que restablezca la política anterior de “lugares sensibles” mientras continúa el litigio.

A pesar de las afirmaciones de la administración Trump-Vance de que se ha reducido el uso de la fuerza, las actividades de ICE han continuado. Declaraciones juradas presentadas ante la corte informan que agentes armados han aparecido en estacionamientos escolares y cerca de paradas de autobús, que padres han sido detenidos mientras dejaban o recogían a sus hijos, que agentes

han seguido autobuses escolares y han realizado operativos cerca de escuelas primarias, que escuelas han entrado en confinamiento debido a actividades de inmigración cercanas, y que la asistencia en algunos distritos ha disminuido hasta en un tercio.

Solo las Escuelas de Fridley han tenido que dar de baja al menos a 20 estudiantes debido a ausencias prolongadas relacionadas con el temor a la actividad migratoria, lo que probablemente le ha costado al distrito miles de dólares en financiamiento estatal. Tanto Fridley como Duluth han tenido que ampliar el aprendizaje remoto y gastar fondos significativos para responder a las actividades migratorias y tranquilizar a las familias. DHS no justificó su repentino cambio de política, ignoró la confianza generada durante tres décadas y desestimó el daño previsible al acceso de los niños a la educación.

“Lo que está ocurriendo en Minnesota no es aplicación de la ley migratoria; es la inyección deliberada de miedo en los salones de clase”, dijo **Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward**. “Durante más de 30 años, nuestro país reconoció una verdad simple: los estudiantes están protegidos mientras están en la escuela. Los niños merecen aprender sin agentes armados apostados afuera de sus paradas de autobús, sin padres esposados en la entrada de la escuela y sin maestros preguntándose si sus estudiantes desaparecerán de la noche a la mañana. El DHS eliminó esas protecciones sin explicación y sin considerar la devastación que ello conllevaría. Esta política es ilegal, imprudente y profundamente dañina. Estamos pidiendo a la corte que restablezca el estado de derecho y garantice que los niños puedan acceder a la educación sin miedo”.

El caso es *Fridley Public School District (ISD 14) et al. v. Noem, et al.*, y el equipo legal de Democracy Forward en este asunto incluye a Elena Goldstein, Sean Ouellette, Ally Scher y Paul Wolfson.

Lea la presentación [aquí](#).